



Las y los conservadores solo retrasarán el curso de la historia

Desde ahora puedes suscribirte automáticamente

[Suscribirse a la Revista Primera Piedra](#)

Editorial

I. De la transición energética justa a la transición socioecológica popular. Extracto publicación Nueva Sociedad	3
II. Coyuntura semana 27 de noviembre 2023 Club Central Idegys. Por Club Central Idegys....	6
III. Encuesta Signos revela que caso Hermosilla afecta a ambas opciones constitucionales. Por El Mostrador	7
IV. País Vasco: huelga general feminista en defensa de un sistema público de cuidados. Por Resumen	8
V. David Bravo sobre cifras del Desempleo y Evelyn Apeleo por la situación del SII en Al Pan Pan. Por El Mostrador	10



EDITORIAL - 1068

El sistema productivo y económico de Latinoamérica vive un proceso de control casi total por parte de las grandes corporaciones y gobiernos, donde la clase trabajadora poco o casi nada puede intervenir. Con un sindicalismo que cada día convoca menos a las nuevas generaciones, caracterizado por una falta de profundidad en la preparación de sus dirigencias, y poniendo en tensión el acceso al trabajo y lo que debería ser un sistema económico social, ecológico, de bienestar y con perspectiva de género.

La tensión entre acceder al trabajo y respetar el medio ambiente, viene acompañada por una nueva forma de emplearse desde la pandemia del Covid - 19: el autoempleo o empleo informal. Sin seguridad social, que no responde necesariamente a generar ingresos para los Estados desde los impuestos generales, y que podría poner en peligro un sistema de solidaridad cuando quienes trabajan igualen a los jubilados.

En perspectiva, durante la Pandemia, se produjo el doble de cesantía que la crisis de los años 80; y al 2023 Chile se encuentra con niveles de desempleo parecidos a los del 2010, con la gran diferencia, que hoy la recuperación de puestos de trabajo a caminado por el lado de las mujeres (que hoy tienen más trabajo que los hombres).

Los Estados deberán rápidamente idear políticas de cambio productivo (que vaya eliminando la concentración del patrimonio y riqueza) y de educación (para nuevos conocimientos y actualización laboral) más allá de los gobiernos de turno, en el sentido, que no importará quién gobierne, porque será una nueva organización social la que no los deje gobernar: el autoempleo y la informalidad (están organizados y en movimiento).

“Las y los conservadores solo retrasarán el curso de la historia”



I. De la transición energética justa a la transición socioecológica popular. Extracto publicación Nueva Sociedad

Es un lugar común señalar que el movimiento ambientalista y las organizaciones sindicales tienen una relación antagónica, en la medida en que el primero cuestiona un conjunto de actividades productivas de las cuales dependen para su subsistencia los sectores del trabajo representados por los segundos. Distintos esfuerzos se desplegaron para contrarrestar esta tendencia. El más difundido ha sido la promoción de una transición laboral justa, principalmente desde el movimiento sindical internacional. Pero la adopción de estos lineamientos estratégicos por parte de organizaciones sindicales latinoamericanas nacionales, o más aún, en la acción gremial que se desarrolla en los lugares de trabajo y territorios, ha sido hasta el momento realmente limitada.

En buena medida, esto es resultado de un proceso de más larga data, vinculado con el deterioro de la capacidad de representación de las organizaciones de trabajadores en el siglo XXI, habida cuenta de las transformaciones en los regímenes de trabajo desde los años 70 del siglo pasado. Y alcanza una magnitud mayor en el contexto regional. Las bajísimas tasas de afiliación sindical y de cobertura de la negociación colectiva en el continente son un indicador de esto, junto con otro hecho incontestable: más de la mitad de la fuerza laboral del continente está compuesta por trabajadoras y trabajadores sin derechos, sin estabilidad en el empleo ni en los ingresos, ya se trate de asalariados y asalariadas sin registro, por cuenta propia o de la «economía popular». Se trata de una tendencia estructural que se profundiza y mina las bases y estructuras de representación del sindicalismo construidas en el siglo pasado. Desde mediados de 2020, la recuperación de los efectos económicos de la crisis sanitaria fue traccionada por el denominado «empleo informal»; en particular, la recuperación fue liderada por el sector no asalariado, cuentapropista. Entre 2020 y 2022 este sector explicó 76% de los nuevos empleos en Argentina, 83% en Bolivia, 67% en México, 82% en Ecuador, 75% en Perú y 68% en Paraguay, para dar algunos ejemplos. De manera que no es posible concebir una programática para una transición desde el Sur global que no incluya al conjunto de la clase trabajadora: asalariada o de la «economía popular», formalizada, sindicalizada o sin derechos, urbana, rural, campesina, indígena o migrante.

Pero hay otros motivos de peso que explican la escasa resonancia del enfoque de la transición justa en el movimiento de trabajadores y trabajadoras de la región. En primera instancia, el enfoque de la transición justa que se ha consolidado se vincula con las demandas y orientaciones de los sindicatos del Norte, donde los procesos de descarbonización afectan principalmente a los trabajadores de la energía y a las



comunidades que dependen de estas actividades. En esos contextos, sindicatos más fortalecidos, mayor alcance de la negociación colectiva y niveles sensiblemente más bajos de informalidad laboral facilitan la implementación de políticas de transición justa en ámbitos de negociación tripartitos. Este modelo de políticas de transición laboral justa, que ha dado algunos resultados en los países centrales, no puede importarse sin más a las periferias, donde los institutos colectivos del trabajo y los sindicatos son estructuralmente débiles, y donde las conquistas sociolaborales suelen ser el resultado de la acción de coaliciones sociopolíticas amplias, intersectoriales, ligadas a procesos de movilización de masas que eventualmente logran insertar sus demandas en las políticas públicas y medidas gubernamentales.

En segundo lugar, y esto es particularmente importante para el caso de Argentina, las vías de la transición no pueden eludir la centralidad que asume el sector primario exportador en el modelo de desarrollo en materia de constitución de elites e intereses de clase, desintegración territorial federal, sistema de transporte y logística hipertrofiado, extensión de la deforestación y de usos insustentables del suelo, extractivismo minero energético y pérdida de soberanía sobre puertos y vías navegables. Aquí los sindicatos tienen un largo camino de articulación intersectorial, movilización y negociación por recorrer, capaz de conjugar una estrategia de organización gremial con la disputa política por una transición socioecológica popular.

En 2020, un arco amplio de organizaciones que incluyó a las de la «economía popular», los sindicatos de la construcción, ferrocarriles, camioneros, metalmecánicos y del transporte naval hicieron público un documento programático titulado «Plan de Desarrollo Humano Integral. Propuestas para la Argentina post pandemia. Tierra, Techo y Trabajo». Si bien el impulso menguó en los meses siguientes y finalmente no se logró implementar el programa, el documento sentó las bases para la discusión del modelo productivo desde una concepción ampliada de la clase trabajadora y de sus demandas, en la medida en que conectó al sindicalismo tradicional, representante del trabajo registrado y cubierto por convenios colectivos de trabajo, con el «otro movimiento obrero»¹⁸, encarnado colectivamente por las organizaciones sociales y de la denominada «economía popular».

Aun con limitaciones y aspectos por profundizar, los ejes del plan constituyen lineamientos generales que alimentan el enfoque de una transición ecológica popular: generación de empleo, construcción e integración urbana, transporte multimodal, repoblamiento federal, ahorro y reactivación productiva para la transición ecológica. Construyen además un lenguaje de valoración que asocia desarrollo sustentable con trabajo digno: tierra, techo y trabajo, repoblar la patria, integrar ciudades, conectar el territorio, reactivar la producción y cuidar la casa común.



Más recientemente, la Mesa Agroalimentaria Argentina (que integran organizaciones de la agricultura familiar, el cooperativismo y el movimiento agroecológico) visibilizó en el debate político nacional las problemáticas del trabajo rural, campesino y cooperativo frente a los impactos de la sequía y los efectos en la producción de alimentos para el mercado interno. En julio de 2023, llevaron a cabo una caravana agraria al Congreso nacional para impulsar 10 puntos del «Programa agrario para el alimento». Proponen la creación de una empresa pública que planifique la producción y comercialización de alimentos para el mercado interno, cuyos objetivos de carácter federal son el abastecimiento frutihortícola y el aumento de la producción de carnes, más un paquete de leyes de acceso a la tierra y de arrendamiento rural, impulso a la agroecología, protección de territorios campesino-indígenas, financiamiento cooperativo, segmentación impositiva y creación de mercados de cercanía.

Junto con estas iniciativas programáticas intersindicales e intersectoriales y en paralelo a ellas, se registran avances concretos territoriales, que conjugan organización popular, implementación de políticas públicas y la emergencia de nuevas dirigencias de los sectores del trabajo por fuera de las estructuras históricas del sindicalismo. Entre estas, podemos destacar aquellas vinculadas con la integración de barrios populares y el tratamiento y reciclaje de residuos sólidos urbanos, donde se destacan figuras como Fernanda Miño, dirigente del movimiento villero, María Castillo, cartonera en la función pública que impulsa el programa Argentina Recicla, o Natalia Zaracho, diputada nacional y conductora de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, las tres integradas en la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (utep).

En definitiva, tal vez (solo) es posible vislumbrar una estrategia de transición ecológica popular en la conjunción de economía y feminismos populares, gremialismo rural, cooperativismo y sindicalismo histórico, es decir, en una definición amplia de la clase trabajadora y sus composiciones organizativas realmente existentes.



II. Coyuntura semana 27 de noviembre 2023 Club Central Idegys. Por Club Central Idegys

Leer en:

https://www.idegys.cl/coyunturaclubcentral/1_A%20NUESTROS%20LECTORES%20CLUB%20CENTRAL%20IDEGYS.pdf

COYUNTURA

- SALUD, BIENESTAR Y ECONOMÍA
- INESTABILIDAD Y CRISIS
- PRESUPUESTO 2024
- COMPRENSIÓN Y COOPERACIÓN

Semana 27 de noviembre 2023



III. Encuesta Signos revela que caso Hermosilla afecta a ambas opciones constitucionales. Por El Mostrador

Esta semana, Signos –encuesta realizada por Smartanalytics en colaboración con El Mostrador– mostró un crecimiento de las menciones “A favor” de cuatro puntos porcentuales, lo que dejó las cifras en 46,5% para el “En contra” y en un 36,2% para el “A favor”. Es decir, una distancia de 10 puntos porcentuales con un 14% todavía de indecisos, lo que implica una diferencia importante entre ambas opciones, tomando en cuenta el marcado desinterés ciudadano sobre el proceso.

Es conveniente señalar que mientras la gran mayoría de los votantes por el Apruebo en el plebiscito anterior votarán En contra en el actual, solo el 62,3% de los que votaron Rechazo se pronuncian por el “A favor”, lo que podría significar que un grupo importante de ellos prefiere legitimar y continuar con la Constitución vigente.

Los temas sectoriales prácticamente desaparecen de la preocupación ciudadana en la coyuntura actual. Esta se ve literalmente dominada por los temas de seguridad, especialmente delincuencia, migración y narcotráfico, cuyas menciones superan el 74%. Tal cifra, más las preocupaciones ciudadanas por la inflación y alzas de precios, ponen un acento dramático de temor ciudadano al momento electoral que vive el país.

En materia económica se percibe una situación ambivalente en la ciudadanía. Mientras las opiniones sobre la marcha económica del país son muy negativas (malo y muy malo suman un 46% y un 40,2% señala que es regular), ello contrasta con la percepción sobre la economía personal, en la cual el 42,4% considera su situación como buena o muy buena. La posible explicación de esta discrepancia entre lo nacional y lo personal radicaría en que, al momento de responder, el encuestado adoptaría un sesgo político-ideológico al evaluar su posición.

En materia de aprobación a la gestión del Presidente Gabriel Boric, esta alcanza un 35,2%, lo que muestra una fuerte desaprobación.

La encuesta evaluó el grado de conocimiento ciudadano del denominado caso Audios y posibles coimas en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Los resultados muestran un alto conocimiento de la población, sin embargo, a la hora de evaluar sus efectos sobre el proceso electoral en curso, no se percibe un efecto marcado sobre una u otra de las opciones plebiscitarias.

En materia de afectación de derechos de las mujeres en la propuesta de nueva Constitución, prácticamente un 50% dice que sí se afectarían y un 50% señala que no. Sin embargo, al desagregar los datos, se aprecia una clara diferencia entre hombres y mujeres. Mientras un 68,3% de las mujeres considera que sí los afectará, entre los



hombres solo un 35,2% participa de esta idea. Ello podría explicar por qué la opción “En contra” es significativamente mayor en las mujeres que en los hombres.

En cuanto a la adelantada carrera presidencial de la derecha, los datos de la encuesta indican que José Antonio Kast ha repuntado, ubicándose ligeramente por sobre Evelyn Matthei, aunque dentro del margen de error. Ello puede reforzar la idea de que la figura de Kast está muy asociada al éxito del “A Favor”, lo que implicaría que el aumento de esta opción se traspasa a Kast y viceversa.

En el oficialismo, Camila Vallejo es el liderazgo del oficialismo con un mejor posicionamiento presidencial, con una clara ventaja sobre Carolina Tohá y Claudio Orrego.

Lo más notorio en la carrera presidencial es la polarización política del país, que se puede observar en las tasas de rechazo hacia las diferentes opciones presidenciales en todo el espectro político. Consultados los encuestados por quién nunca votarían para Presidente, Camila Vallejo obtiene una tasa de rechazo de 49,8% y José Antonio Kast de 43,6%. En el otro extremo se ubican Claudio Orrego y Evelyn Matthei, con tasas de rechazo de 10,4% y 12,9%, respectivamente.

La encuesta corresponde a un sondeo realizado por Smartanalytics en colaboración con El Mostrador y forma parte de una serie temporal destinada a medir el pulso semanal de los acontecimientos más relevantes de la coyuntura nacional. Es una encuesta probabilística aplicada a un panel con apoyo de instrumentos de IA para mejorar su eficiencia.

IV. País Vasco: huelga general feminista en defensa de un sistema público de cuidados. Por Resumen

El 30 de Noviembre ha sido un día histórico en los territorios vascos bajo ocupación española (Euskadi y Navarra), el movimiento feminista ha convocado a una Huelga General secundada por las dos principales centrales sindicales vascas ELA y LAB, además de otras organizaciones sindicales como Steilas (sindicato de la Educación), EHNE (Sindicato campesino), además de ESK, Etxalde y CGT.

Ha sido una huelga organizada desde el movimiento feminista para el conjunto del pueblo vasco, caracterizado por su alto nivel de organización tanto en el ámbito social como sindical. Es la región de Europa con mayor número de huelgas, pero además con resultados positivos de estas en materia de conquistas para los y las trabajadoras.

La convocatoria desde el feminismo y su acatamiento desde el ámbito sindical no son de extrañar, el tránsito de un modelo industrial a uno de servicios, implicó la feminización



de la fuerza laboral y con ello de los sindicatos. En los últimos años en el País Vasco se han sucedido grandes y extensas huelgas, con grandes victorias en sectores dominados por mujeres como la atención residencial y la limpieza. Mientras que el número de huelgas de hombres en Euskadi disminuyó en 2022 en 80.186 días, el número de huelgas de mujeres aumentó en 12.088. Las mujeres constituyen ahora la mayoría (56%) de los participantes en las huelgas.

Sin embargo, lo que ya se expresaba en los centros de trabajo, tenía un talón de Aquiles al interior de las propias familias, especialmente en los cuidados de infantes, abuelos y abuelas, además de personas enfermas o personas con alguna dificultad física o mental específica. Esta realidad fue desnudada durante la pandemia, donde se evidenció el trabajo de cuidados, que generalmente hacen mujeres y migrantes indocumentados en la más absoluta precariedad. Durante la pandemia, muchas actividades se detuvieron, in que ello ocurriera con las tareas de los cuidados, de vital necesidad.

Este 30 de noviembre, las capitales vascas se llenaron bajo la convocatoria feminista que pone a los cuidados como la base para construir una vida digna, exigiendo un nuevo derecho, gratuito y universal: "el derecho a ser cuidadas y cuidados con dignidad".

Las capitales vascas: Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia, Iruña (Pamplona) se llenaron a pesar de las lluvias con miles de manifestantes y se realizaron piquetes en acceso a sitios públicos y lugares de trabajo.

En entrevista al portal vasco naiz.eus, Josefina 'Txefi' Roco Sanfilipo miembro del colectivo Trabajadoras no Domesticadas y del grupo motor convocante de la histórica huelga feminista señaló: "el capital, como una rueda loca, está poniendo en el centro todo el tiempo la especulación, la acumulación y la generación de negocio. Y eso se ha visto porque con la pandemia se profundizó en la crisis de los cuidados, y fíjate cómo el capital rápidamente se reorganizó, se reestructuró, y encontró en los cuidados un nuevo nicho de negocio: el mercadeo de los cuidados. En la Comunidad Autónoma del País Vasco y en Navarra es impresionante el proceso de privatización que ha habido, acelerado y profundo, en donde solo un porcentaje muy pequeñito de residencias, quedan en gestión pública". Agregando que en el sector privado "hay compañeras que dicen tengo que hacer en 12 minutos todo eso y es que estoy violentando todos los días a una señora o a una abuela o a un abuelo".

Entre las reivindicaciones de la huelga está derogar la Ley de Extranjería y regularizar a todas las trabajadoras de cuidados migrantes, ya que el sector no solo esta feminizado, sino también racializado.

Para Nagore Iturrioz, del sindicato de educación Steilas, «el trabajo de cuidados tiene que estar sustentado sobre unos servicios públicos fuertes. La responsabilidad tiene que recaer en las instituciones». Añadió que todas y todos están llamados a sumarse



activamente al movimiento: «queremos que todo el mundo tenga derecho a ser cuidado con dignidad y que todas tengamos la obligación de cuidar para que no sean unas pocas, en situación de explotación, quienes tengan que hacerlo. Hoy, no cuidar es un privilegio. Un privilegio que tienen los hombres, pero también las blancas o las personas jóvenes».

Las convocantes a la Huelga General, tienen la intención que a partir de ella, la sociedad empiece a hablar de esto y empiece a politizar el problema de los cuidados.

V. David Bravo sobre cifras del Desempleo y Evelyn Apeleo por la situación del SII en Al Pan Pan. Por El Mostrador

Hacer clic en el vídeo:

